

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

Medellín, veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, integrada por los Magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES (ponente), MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ y NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR, cumplido el traslado de que trata el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, procede a dictar la sentencia que corresponde en este proceso ordinario instaurado por ANGÉLICA MARÍA VILLADIEGO GONZÁLEZ en contra de COLFONDOS S.A. PENSIONES Y CESANTÍAS, siendo vinculada como interviniente excluyente ARCILIA PÉREZ TORREGLOSA, en representación de sus hijos JUAN SEBASTIÁN, JULIÁN ANDRÉS y JOSÉ LUIS ARGEL PÉREZ (Radicado 05001-31-05-016-2018-00611-01).

ANTECEDENTES

Pretende la demandante se condene a Colfondos S.A al reconocimiento y pago de una pensión de sobrevivientes con ocasión a la muerte de su compañero permanente Dairo Luis Argel Pérez a partir del 15 de mayo de 2017, con los intereses de mora que contempla el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas procesales.

Al efecto, narró que Dairo Luis Argel Pérez, su compañero permanente falleció el 15 de mayo de 2017 cuando laboraba para la finca bananera “cascada” en Urabá, momento para el cual se encontraba afiliado a Colfondos S.A. Convivió

con el causante de manera permanente e ininterrumpida desde noviembre de 2011 y hasta el 15 de mayo de 2017, vínculo del que procrearon una hija, Jeilly Milet Argel Villadiego. El 05 de junio de 2018 en su nombre y el de su hija solicitó el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, decidiéndose por comunicación del 15 de agosto de 2018 suspender el 50% de la prestación hasta tanto se proferiera sentencia judicial en su caso. Informa que en relación anterior, Dairo Luis procreó tres hijos, Juan Sebastián, Julián Andrés y José Luis Argel, actualmente menores de edad, a quienes se les reconoció la pensión de sobrevivientes así como a su hija Jeilly Milet en un 12.5% (fls. 1-23).

COLFONDOS S.A dio respuesta al líbelo aceptando la afiliación del fallecido, su muerte, la reclamación que la demandante efectuó, así como la negativa de su derecho y el otorgamiento a su hija. Afirmó no constarle el hecho de la convivencia. Formuló como excepciones de fondo las que denominó: No se acreditó el requisito de tiempo de convivencia mínimo para ser beneficiaria de la pensión de sobrevivencia, inexistencia de la obligación, inexistencia de mora cuando no se acreditan los requisitos exigidos en la ley, para acreditar la calidad de beneficiario de una prestación económica, falta de legitimación en la causa por pasiva, cobro de lo no debido, buena fe, pago y compensación y prescripción (fls.91-179).

Por medio de providencia emitida por el operador judicial el 03 de abril de 2019, se dispuso la modificación del auto que admitió la demanda contra Arcilia Pérez Torreglosa en representación de sus hijos Juan Sebastián, Julián Andrés y José Luis Argel Pérez, para en su lugar disponer su vinculación en calidad de interviniente excluyente (fl. 90).

En ese orden se presentó escrito de demanda, en la que Arcilia Pérez Torreglosa pretende sean declarados como únicos beneficiarios del afiliado fallecido sus hijos, a quienes se les habrá de reconocer el 25% de la prestación a cada uno. Como fundamentos de hecho señaló: Tuvo una relación con Dairo

Luis Argel Pérez de la cual procrearon tres hijos. Luego también generó un vínculo con Angélica Villadiego, de la que nació Jeilly Milet Argel el 07 de mayo de 2014. Advirtió que los 5 años anteriores a la muerte de Dairo ocurrida el 15 de mayo de 2017 no estaba conviviendo con Angélica Villadiego, de quien se había separado desde septiembre de 2016, además de no haber iniciado tal convivencia en noviembre de 2011 (fls.140-151).

COLFONDOS S.A se pronunció sobre los hechos de la demanda excluyente, aceptando la mayoría de los hechos y señalando no constarle la fecha de iniciación de la convivencia del fallecido con la demandante. En esta oportunidad propuso como medios exceptivos los de inexistencia de la obligación del pago de intereses moratorios, buena fe, pago, compensación y prescripción (fls. 185-192).

Por su parte, ANGÉLICA MARÍA VILLADIEGO GONZÁLEZ se pronunció oponiéndose a las pretensiones de la interviniente, por considerarse beneficiaria del 50% de la prestación por muerte que se persigue, advirtiendo que los últimos meses de vida de Dairo Luis estuvieron separados, pero por razones de trabajo y estudio que ella asumió en el Municipio de Carepa, continuando con la firme voluntad de conservar el vínculo. Presentó las excepciones de fondo de temeridad y mala fe, y falta de legitimación en la causa por activa (fls. 193-223).

Surtido el trámite de rigor, el 12 de mayo de 2021 el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín profirió sentencia en la que NEGÓ la totalidad de las pretensiones principales elevadas por Angélica María Villadiego González. DECLARÓ probada la excepción de inexistencia de la obligación. DECLARÓ que a los hijos menores les asiste el derecho a que Colfondos S.A les reconozca el 100% de la prestación en un 25% para cada uno con indexación, de cuyo retroactivo se autorizó el descuento por aportes en Salud. CONDENÓ en costas a la demandante, fijando por agencias en derecho la suma de

\$2.000.000 distribuidos de forma equivalente para Colfondos S.A y la interviniente.

La demandante principal y Colfondos S.A interpusieron recurso de apelación, sobre el que esta dependencia se pronunció en auto emitido el 05 de agosto de 2021, admitiéndose el desistimiento de la alzada presentado por el Fondo demandado, y absteniéndose de conocer el asunto por apelación para el caso de la demandante principal por ausencia de sustentación. En esos términos y en el marco de lo que regula el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por ser el resultado de la Litis desfavorable totalmente a los intereses de Angélica María Villadiego González, es que será asumido el conocimiento del proceso en esta sede en el grado de consulta.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES

Previo a decidir sobre el grado de consulta frente a la providencia de fondo dictada, esta Sala se encargará de resolver en primera medida la apelación interpuesta por la Interviniente excluyente a través de su representante judicial contra el auto que decidió no decretar una prueba de oficio.

Al respecto, debe indicarse que, el artículo 168 del CGP aplicable por remisión analógica permitida por el 145 del CPTSS, prescribe que el juez rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles. Última característica definida por el tratadista Hernán Fabio López Blanco, a partir de la utilidad de la prueba indicando que: “... se entiende por utilidad de

*la prueba el aporte que puede llevar al proceso para cumplir el fin de crear la certeza acerca de los hechos en el ánimo del funcionario judicial, en otros términos, el poder enriquecedor del convencimiento del juez que determinada prueba conlleva*¹. Por manera que, si con las pruebas que reposan en el plenario, en sentir del juzgador, resulta suficiente para lograr el convencimiento necesario con el fin de tomar una decisión de fondo, considerando que otros elementos de convicción no aportarían al esclarecimiento de los hechos objeto de debate, estos últimos pueden ser rechazados.

Con base en esa orientación, se descende al caso concreto, encontrando que como bien lo expuso el *a quo* la prueba de oficio dirigida a obtener el trámite adelantado por la demandante contra el occiso ante la Comisaría de Familia de Turbo no debe ser decretada toda vez que tal medio de convicción es superfluo de cara a los fines que buscaba la interviniente con su futura práctica. Sostuvo la parte apelante en la que coadyuvó Colfondos S.A., que con esta prueba se buscaba comprobar la separación de cuerpos y repartición de bienes que se presentó entre las partes y que desvirtúa la convivencia alegada, esencial para acceder a la pensión de sobrevivientes. Empero, en el plenario ya obra suficiente material probatorio para lograr esa finalidad, sin que tal documento tenga la entidad de establecer sin lugar a dudas y de manera determinante, que con el causante existió o no la pregonada convivencia en los términos legales, pues aun con esta formalidad, la pareja pudo continuar en el plano de la realidad con el propósito de dar continuidad a su relación bajo la noción estricta de conservar los lazos familiares y afectivos, con lo que se derruye la pertinencia y necesidad de la prueba.

De modo que, no se avizoran argumentos fácticos o jurídicos que permitan el decreto de la prueba solicitada por la pasiva, por lo que se **confirmará** el auto gravado.

¹ Código General del Proceso, Pruebas, Tomo 3, página 112, edición 2017.

Ya abordando el estudio de la providencia que decidió la litis, se tiene que no es tema de discusión al interior del plenario que Dairo Luis Argel Pérez falleció por causas de origen común el 15 de mayo de 2017 (fl. 7), dejando causado el derecho a la pensión de sobrevivientes en su calidad de afiliado, lo que dio lugar al reconocimiento de la prestación económica a sus hijos menores de edad Juan Sebastián, Julián Andrés, José Luis y Jeilly Milet Argel (fls. 126-134).

De cara a lo anterior, y atendiendo el asunto por el grado de Consulta, el problema jurídico a resolver por la Sala será determinar si ANGÉLICA MARIA VILLADIEGO GONZÁLEZ acredita en debida forma el requisito de convivencia, necesario para ser beneficiaria en su calidad de compañera permanente de la pensión de sobrevivientes con causa del deceso de DAIRO LUIS ARGEL PÉREZ ocurrido el 15 de mayo de 2017. Definida esa situación jurídica, se analizará la procedencia de imponer el pago de intereses moratorios, indexación y costas a cargo de Colfondos S.A.

Pues bien, para resolver se tiene que la normatividad aplicable es la vigente al momento en que acaeció la contingencia asegurada - teoría del hecho causante- por lo que dada la data en que ocurrió el óbito, debe aplicarse lo que dispone el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, modificado por el 13 de la Ley 797 de 2003 para definir el derecho a la pensión de sobrevivientes deprecada, que señala los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, indicando textualmente lo siguiente de cara al tema:

“a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte;

b) En forma temporal, el cónyuge o la compañera permanente supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del

fallecimiento del causante, tenga menos de 30 años de edad, y no haya procreado hijos con éste. La pensión temporal se pagará mientras el beneficiario viva y tendrá una duración máxima de 20 años. En este caso, el beneficiario deberá cotizar al sistema para obtener su propia pensión, con cargo a dicha pensión. Si tiene hijos con el causante aplicará el literal a).

Así, para quien pretenda ser beneficiaria (o) de una pensión de sobrevivientes debe demostrar de manera cierta y convincente la convivencia por un espacio de 5 años con el causante, independientemente de sea un afiliado o un pensionado, en concordancia con lo definido por la SU 149 de 2021, que se opuso a la postura jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia -Sala de Casación Laboral- que determinó como verdadero alcance del literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003 a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, in dubio pro operario, que el tiempo de convivencia mínima de cinco (5) años, solo es exigible en caso de muerte del pensionado (Ver SL1730-2020 reiterada en SL3843-2020, SL3785-2020, SL4606-2020, SL489-2021, SL362-2021, SL1905-2021, SL2222-2021 y SL5270-2021); con el argumento de violar tal decisión directamente los principios de igualdad y sostenibilidad financiera del sistema pensional sin justificación objetiva, y no armonizar con los propósitos de la pensión de sobrevivientes ni con los del requisito de convivencia.

En tal contexto, debe brotar del acervo probatorio que existió con el fallecido Argel Pérez una convivencia ininterrumpida de por lo menos 5 años anteriores a su muerte, entendida esta como la “*comunidad de vida, forjada en el crisol del amor responsable, la ayuda mutua, el afecto entrañable, el apoyo económico, la asistencia solidaria y el acompañamiento espiritual, que refleje el propósito de realizar un proyecto de vida de pareja responsable y estable, a la par de una convivencia real efectiva y afectiva- durante los años anteriores al fallecimiento del afiliado o del pensionado*” (Ver SL3813-2020 y SL5540-21 que traen a colación la SL1399-2018).

Para ese fin, el polo activo de la litis arribó como prueba documental una declaración extra juicio rendida por Dairo Luis Argel el 28 de marzo de 2012

ante el Notario único de Apartadó - Antioquia (fl.9), en la que dejó sentada la unión marital de hecho existente con la demandante desde siete meses atrás, de la que se concibió a Jeilly Milet Argel Villadiego nacida el 07 de mayo de 2014 (fl.16). Asimismo, se arribó certificación de la EPS Coomeva (fl.21 y 21 vto) y la Caja de Compensación familiar de Comfenalco (fl.22-23) donde figuraba para la defunción como beneficiaria del finado junto con su hija, además de una transacción celebrada por la señora Villadiego con quien fungía para el momento de la muerte como empleador - Agrícola Sara Palma S.A- para la entrega de las prestaciones sociales causadas y no pagadas al trabajador, a quien le fueron reconocidas (fl.17-20).

Adicional a ello, trajo la testimonial de DORIS DONADO ESPITIA (Vecina), DOMINGA JUDITH BELTRÁN SALCEDO (vecina) y ELISEO PALACIO MORENO (jefe inmediato Angélica), todos con oportunidad de conocer a la demandante y a Dairo a partir del año 2016, por lo que desde ya, mal podría advertirse una debida acreditación del requisito de convivencia por el término de cinco años de manera ininterrumpida derivada del conocimiento directo de estos testigos, pues de su parte resulta ausente la prueba para el período del 29 de marzo de 2012 al año 2016, dando cuenta únicamente de hechos presentados a partir de esta calenda, siendo que las probanzas deben estar dirigidas a demostrar la convivencia precisamente dada entre el 15 de mayo de 2012 y el mismo día y mes de 2017, resultando insuficientes las afirmaciones recibidas para asegurar que la pareja en ese lapso forjó una comunidad de vida en el tiempo que por ley se exige para acceder a esta prestación económica.

Es cierto y relevante que la hija en común nació el 07 de mayo de 2014, pero es que ello por sí mismo no da cuenta de una convivencia continua presentada en la pareja hasta el momento de la muerte, así como tampoco se le asigna la idoneidad necesaria para evidenciar este hecho, a la afiliación en salud de la demandante que hasta el deceso se dio en calidad de beneficiaria, pues bien ha precisado la Alta Corporación en nuestra especialidad, que el trámite administrativo de inscribir como beneficiaria a una persona al sistema de salud,

no apareja la real y efectiva convivencia; y menos, revela los extremos temporales en los que aconteció (Ver SL3848-2020 y SL2032-2022).

Es verdad que la inscripción de una persona como beneficiaria de los servicios de salud del afiliado que murió, es indicativa de la convivencia exigida legalmente para la concesión de la pensión de sobrevivientes, así como en este caso lo es el nacimiento de la hija y la entrega de las prestaciones sociales a la demandante en su calidad de compañera permanente, pero es que la condición de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes depende es de la acreditación de una convivencia real y efectiva, que se estructura sobre vínculos de solidaridad y apoyo mutuo entre la pareja, con vocación de permanencia y ánimo de conformación de una familia, más que por elementos meramente formales.

Ahora, la interviniente excluyente allegó los testimonios de LUIS FERNANDO ARGEL PÉREZ y ARLEDYS PÉREZ MARTÍNEZ, hermanos del fallecido, quienes reconocen a la demandante como su ex cuñada, señalando Arledys como inicio de esa convivencia el año 2011 aunque referenció contradictoriamente una duración de 2 a 3 años. Coincidieron ambos en advertir que Dairo Luis había sido abandonado por Angélica Villadiego desde el año 2016, específicamente en septiembre u octubre, cuando finalizó el vínculo por problemas personales con los hijos de la anterior relación de los que desconocen los detalles, sin existir de por medio reconciliación, explicando Luis Fernando que entre julio y agosto de esa calenda su hermano estuvo residiendo en su casa para luego concretarse la separación con venta de un inmueble, época desde la que compartía techo con dos sobrinos y un hermano - Luis Alfonso-, sin que Angélica regresara a vivir allí, pues se radicó en el Municipio de Carepa con su hija.

Acorde a esas declaraciones, es dable dar por demostrada la convivencia que se invoca entre el año 2011 y el 2016; no obstante, no logra demostrarse su extensión hasta la data del fenecimiento. Nótese como Doris Donado - vecina

en el Barrio Vélez en Currulao donde residió Dairo sus últimos días- se limitó a advertir que existió una relación de convivencia porque siempre desde el año 2016 vio a la pareja, y que por un acuerdo al que se llegó, Angélica se fue a vivir a Carepa sin precisar fechas, aseverando que siguieron la relación, lo que supo por afirmaciones de la misma demandante, sin que le haya sido posible compartir en su deponencia la forma en cómo se desarrolló bajo esas circunstancias la unión, ya que únicamente advirtió que veía a Angélica llegar con su hija o a Dairo irse algunos fines de semana sin presenciar las particularidades de la relación, desconociendo información trascendental como la información de los hijos de Dairo, la certeza de que la pareja compartía techo pues no supo si amanecían en el mismo lugar, las personas que residían con el causante los últimos meses pese a compartir vecindad, la existencia de alguna separación y las personas que concurrieron al sepelio como dolientes pues no asistió, dejando ver su dicho que su cercanía no era tal para constituirse en espectadora fehaciente de la relación de pareja que quiere demostrar la actora en el último año de vida de Dairo Luis Argel.

Dominga Judith Beltrán - cuidadora de Jeilly Milet en Carepa y vecina de Angélica en Carepa - Ant.- manifestó que entre Dairo y Angélica existía una relación de pareja, porque todos los fines de semana llegaba a visitarlas, aserción que no se compadece con la suministrada por la anterior deponente, quien atestiguó presentarse rotación en las visitas entre Currulao y Carepa, ni por la demandante cuando advirtió dificultad en los horarios, donde Dairo por ser trabajador bananero tenía épocas en las que laboraba de lunes a lunes. Dijo haber conocido a Dairo como el padre de Jeilly Milet sin estar al tanto de más allá de esa información, señalando que se veían a su juicio como una pareja normal, desconociendo si Angélica lo visitaba, no supo sobre el lugar donde Dairo residía, desconocía estudios que estaba realizando Angélica, pero si atestó que no vivían juntos por dificultades de índole laboral según información dada por Angélica, dicho que igualmente deja ver su escasa proximidad a ese grupo familiar y conocimiento directo y fidedigno de las condiciones personales y familiares de la pareja.

Finalmente, Eliseo Palacio - Jefe Inmediato de Angélica para 2016- ningún aporte sustancial otorgó a esta Litis, en tanto afirmó conocer a Dairo porque en una sola oportunidad se hizo presente en una finca que la demandante iba a administrar para verificar la condición de afiliación al Sistema de Seguridad Social, siendo presentado como pareja de la trabajadora, desconociendo absolutamente su situación familiar y las condiciones que rodeaban aquella relación.

De modo que, el material probatorio en su conjunto, no da cuenta de forma irrefutable de una convivencia presentada hasta el 15 de mayo de 2017 cuando acaeció la muerte del afiliado, no encontrándose debidamente demostrado que la pareja presentara un cese en la convivencia física por razones ajenas a su voluntad, cuya noción de vida en común ha sido aceptada por la Corte Suprema de Justicia - Sala de casación Laboral- aún en estados de separación impuesta por la fuerza de las circunstancias, como podrían ser las exigencias laborales (Ver SL12029-2016 y SL4767-2021); pero examinadas las circunstancias adyacentes, no es dable concluir la existencia y permanencia consciente del vínculo marital, el apoyo moral, material y efectivo y, en general, el acompañamiento espiritual permanente que de la plena convicción de que aun para mayo de 2017 y desde el año 2011 había un proyecto mancomunado de vida como pareja y que no había sido la intención de los compañeros finalizar por completo su unión para el año 2016 cuando Angélica partió a Carepa pese a la corta distancia que existe entre este Municipio y el corregimiento de Currulao, y el medio de transporte con el que contaba el señor Dairo que facilitaba su movilización, no pudiendo entender con base a las probanzas, que el vínculo se mantuvo vivo y actuante o que este no desapareció, quedando por el contrario revelado que el hecho de no vivir bajo el mismo techo, tuvo por razón la decisión definitiva de la pareja de darle ruptura, sin que la certificación de folio 209 y las fotografías de folios 199 a 203 tengan la entidad de desvirtuar tal conclusión, ya que lo que puede considerarse es que la relación de padres se mantuvo, lo que implicó las visitas y encuentros para reunirse con su hija Jeilly Milet.

Incluso en este escenario quedó demostrado que el fallecido había iniciado un vínculo sentimental con Erika Yamile Hernández, quien acudió como testigo por petición de Colfondos S.A, para comunicar que en efecto, con Dairo tuvo una relación de noviazgo desde seis meses antes a su muerte, conociendo a Angélica Villadiego como su “ex mujer”, de quien no habían pertenencias en el lugar de residencia del afiliado ya que incluso se llevó todo lo de la casa, lo que corroboró por las visitas realizadas por invitación hecha por Argel Pérez, estando Dairo “*consiguiendo las cosas*” nuevamente, misma que asistió al sepelio, así como lo hizo Arcilia y Angélica, noviazgo que era de conocimiento de los familiares y compañeros del fallecido.

A este punto, no es posible ignorarse las versiones brindadas en el trámite de la investigación administrativa por Miguel Esteban Cárdenas Monterrosa (fl.226-227), y José Julián Álvarez Manco (fls. 231-232), como compañeros de trabajo del afiliado, cuando advirtieron que para la fecha en que ocurrió el evento desafortunado, el cual presenciaron, Dairo no contaba con compañera permanente pues se encontraba separado, oportunidad en la que igualmente Luis Fernando Argel Pérez, Jairo Luis Argel Pérez -sobrino- y Jorge Luis Ayala señalaron que Dairo Luis había finiquitado la relación con Angélica y que tenía una novia conocida como “la paisa” con quien quería casarse (fls. 244-246), versiones que concuerdan con los dichos de los testigos de la pasiva y la interviniente, con los que puede desprenderse el conocimiento generalizado de la separación, y de una nueva relación no simultánea entablada sus últimos meses de su vida con proyectos de elevarlo a una relación estable y permanente.

De modo que, aunque es patente que entre el causante y la demandante principal existió una relación de pareja como compañeros permanentes, el material de probanzas se queda corto para dar por sentado el requerimiento de convivencia dentro de los límites legales, el que Colfondos S.A en sede administrativa tampoco dio por demostrado.

Conforme a todo lo expuesto, al no acreditarse por la activa la calidad de beneficiaria para hacerse acreedora de la pensión de sobrevivientes por la muerte de Dairo Luis Argel Pérez, resulta acertado CONFIRMAR la sentencia de primera instancia, incluida la condena en costas impuesta a la demandante.

En esta instancia no se causaron costas procesales dada la manera como se conoce del asunto (consulta).

DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala cuarta de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **CONFIRMA** la sentencia venida en consulta de fecha y procedencia conocidas. Sin costas en esta instancia.

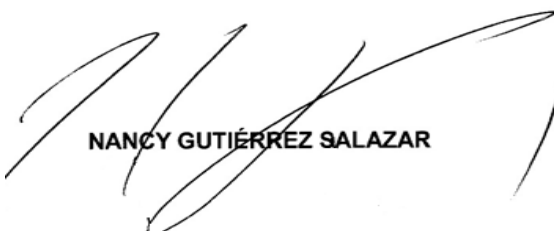
Notifíquese la presente decisión por EDICTO (num.3°, lit. d., art. 41 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en concordancia con el auto 550-2021 CSJ).

Los Magistrados



CARLOS ALBERTO LEBRÓN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
SIN FIRMA POR AUSENCIA JUSTIFICADA



NANCY GUTIÉRREZ SALAZAR

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
SALA LABORAL



SECRETARÍA

EDICTO

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

HACE SABER:

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Radicación: 05001310501620180061101
Proceso: Ordinario
Demandante: ANGELICA MARIA VILLADIEGO GONZALEZ
Demandado: COLFONDOS S.A
M. P. CARLOS ALBERTO LEBRUN MORALES
Fecha de fallo: 29/07/2022
Decisión: CONFIRMA

El presente edicto se fija por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 1/08/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS

Secretario